

Gaddafi indemnizará a las víctimas del 'caso Lockerbie', pero niega la responsabilidad libia

El régimen de Trípoli acoge un foro euromediterráneo en un nuevo signo de apertura

JUAN CARLOS SANZ, Trípoli
ENVIADO ESPECIAL

El régimen libio del coronel Muammar el Gaddafi parece dispuesto a pagar 2.700 millones de dólares (2.940 millones de

euros), una de las mayores indemnizaciones de la historia, para compensar a los familiares del atentado aéreo que se cobró 270 muertes en 1988 en Lockerbie (Escocia). Pero se niega a hacerlo abiertamente.

Su ministro de Exteriores, Abderramán Mohamed Shalgam aseguró ayer que el arreglo había sido ofrecido por una ONG a los abogados de las víctimas y excluyó al Estado libio de responsabilidad penal.

Tanto Naciones Unidas como Estados Unidos exigen como condición previa que Gaddafi reconozca su implicación en el atentado de Lockerbie antes de que sean levantadas definitivamente las sanciones internacionales que pesan todavía sobre Libia.

Con el paseo marítimo de Trípoli engalanado con banderas de cinco países europeos, incluido España, y de otros tantos Estados magrebíes, Libia da un nuevo paso de apertura al mundo al organizar el Foro de Diálogo 5+5, que reúne a ministros de Asuntos Exteriores de ambas orillas del Mediterráneo occidental. Desde la suspensión en marzo de 1999 de la aplicación de las sanciones de la ONU, ésta es la primera vez que se dan cita en Trípoli tantos diplomáticos occidentales al mismo tiempo.

La entrega en aquella fecha de los dos sospechosos del atentado de Lockerbie y su posterior juicio en la base militar de Camp Zheist, en Holanda, por jueces escoceses, se saldó con la condena a perpetuidad del agente del espionaje libio Abdelbasit el Megrahi, cuya sentencia es firme desde el pasado 14 de marzo. "El veredicto de Camp Zheist condenó a un ciudadano libio. No a un funcionario libio, como se llegó a decir por algunos", afirmó ayer el ministro de Exteriores en Trípoli. "Así que Libia no es responsable ni tiene por qué indemnizar a nadie. Si una organización no gubernamental o de caridad quiere ayudar a las víctimas, se trata de otra cuestión", puntualizó Shalgam. "La responsabilidad de Libia terminó cuando los ciudadanos libios sospechosos llegaron a Camp Zheist. Eso es todo".

Un comunicado de su departamento, llamado oficialmente Comité Popular de Enlace Exterior y Cooperación Internacional, precisaba poco antes que



Muammar el Gaddafi, durante una cumbre África-Europa en abril de 2000. / AP

"las declaraciones publicadas en la prensa sobre la aprobación de un plan de compensaciones para las familias de las víctimas de Lockerbie no guardan relación alguna con el Estado libio". En el mismo documento, se menciona a "hombres de negocios libios que, en colaboración con un grupo de juristas, han mantenido reuniones con los abogados de las víctimas sin informar oficialmente [al Gobierno libio]. Las declaraciones publicadas corresponden, en cualquier caso, a la

ONG que se ha ocupado de la defensa de Abdelbasit el Megrahi".

Un responsable diplomático europeo en Trípoli restaba ayer importancia a la literalidad del comunicado: "Ahora la pelota está en el alero de Estados Unidos, que tendrá que hacer frente a la presión de las familias [que son estadounidenses en su mayoría], para cobrar 10 millones de dólares por cada una de las víctimas". El acuerdo de indemnizaciones anunciado el martes en EE UU prevé que el

cobro de las compensaciones se hará en tres plazos: un 40% cuando la ONU levante las sanciones a Libia, otro 40%, cuando también lo haga Estados Unidos, y el 20% restante cuando Libia deje de figurar en la lista de países que, según el Gobierno de Washington, apoyan al terrorismo.

Apoyo al terrorismo

Hace apenas una semana, el Departamento de Estado volvió a incluir a Libia en su informe anual sobre terrorismo global, el primero publicado tras el 11-S. En la relación de Estados que apoyan el terrorismo figuran Irak, Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, junto con Sudán y Libia, si bien los dos últimos, según reconoce EE UU, parecen hacer esfuerzos para salir de la lista negra.

La misma fuente diplomática citada predice que Gaddafi acabará reconociendo de algún modo su responsabilidad, como ya hizo ante el Reino Unido en 1999 para poder reabrir su Embajada en Londres, cerrada a raíz de la muerte de una agente de policía británica por disparos realizados desde el interior de la sede diplomática.

Uno de los abogados de las víctimas de Lockerbie, Charles Kriendler, aseguraba en declaraciones recogidas ayer por la BBC, que "Libia aceptará probablemente su responsabilidad en un plazo de dos semanas". En la misma línea, *The New York Times* informaba en su edición electrónica de ayer de que los gobiernos de EE UU, el Reino Unido y Libia están negociando el texto de una declaración de responsabilidad, que puede ser difundida en una reunión prevista en Londres el mes que viene. Un portavoz de la Casa Blanca insistió en que el anuncio de las indemnizaciones es "un paso necesario, pero no suficiente".

"Libia ya hace tiempo que ha dado muestras de haber dejado de apoyar al terrorismo internacional", aseguraba en Trípoli Carlos Fernández-Arias, responsable para África del Norte dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores español, antes de la inauguración de la conferencia de ministros de Exteriores del Mediterráneo occidental.

Muammar el Gaddafi se declaró "horrorizado" por los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y fue también de los primeros en calificar como actos de "autodefensa" las represalias militares contra Al Qaeda, cuya

red islamista se infiltra hasta un sector de la oposición libia en el exilio.

Pero a pesar de que los debates de Trípoli han girado inevitablemente en torno a la seguridad y la estabilidad en la región tras el 11 de septiembre, el Foro de Diálogo 5+5 ha abierto también sus sesiones a la cooperación Norte-Sur y a la inmigración. España confía en que su propuesta de creación de un Banco de Desarrollo Euromediterráneo, que pareció quedar arrinconada en la cum-

bre europea de Barcelona, reciba un nuevo impulso en Libia después de que los Quince asumieran en la conferencia de Valencia el compromiso de financiar el desarrollo de la otra orilla del Mediterráneo.

Europa quiere vincular sus planes de ayuda a la creación de un mercado único magrebí, que exige la revitalización de la Unión del Magreb Árabe. Francia, que acogerá la reunión 5+5 en 2003, y Túnez, impulsan también la apertura de un diálogo entre ambas orillas so-

bre el fenómeno de los flujos migratorios. "La reunión de Trípoli tiene aspectos económicos, culturales y también sociales, que se enmarcan dentro del Proceso de Barcelona", asegura el ministro de Exteriores libio. "Pero en la conferencia de Valencia, el conflicto entre israelíes y palestinos ocupó la mayor parte de nuestro tiempo. Ahora tenemos la oportunidad de reactivar el diálogo político y analizar los problemas del Mediterráneo Occidental", explica Shalgam.

"El carácter de foro informal es el que le da especial importancia a esta reunión", aclara Fernández Arias, "pues los ministros se atreven a hablar abiertamente de cuestiones que no tendrían cabida en una reunión más rígida".

Del lado europeo se sientan Francia, Italia, Portugal, España y Malta (como país asociado a la UE y candidato a la adhesión), junto a los países del Magreb: Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. El diálogo 5+5 se inició en Argel hace en 1991, aunque quedó interrumpido durante 10 años, hasta la reunión de Lisboa del año pasado.

La fiscalía de Guinea Ecuatorial no logra probar la conspiración

RAMÓN LOBO, Malabo
ENVIADO ESPECIAL

A Julián Michá Eboma la desgracia le viene de 1992, cuando dos de sus patos se metieron accidentalmente en el jardín de Felipe Ondó, principal encausado en este juicio por un supuesto intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Al ir a buscar los animales se topó con la mujer de Felipe, manteniendo una conversación banal. Por ese delito, la fiscalía solicitó ocho años de cárcel. Nada mejor es la situación de Salomón Abeso, que lleva dos meses preso por traer desde España un teléfono móvil de parte de la hija de Felipe. O la de Pedro Alogo, al que se le ocurrió firmar el contrato de ese aparato ya que Ondó carecía de dinero; o la de Baltasar Ogono, que fue testigo de la entrega del presente cuando realizaba obras en casa.

Ninguno de los 20 acusados que ayer subieron al estrado tiene nada que ver con el asunto juzgado en el cine Marfil, de Malabo. Incluso en un par de ocasiones el ministerio fiscal evitó formular preguntas y, cuando las hacía, eran de tal impericia que llegaron a exasperar al presidente del tribunal, Martín Nsú: "Señor fiscal, si tiene alguna pregunta concreta, hágala de una vez, o pase el turno a la defensa". La acusación, nerviosa, erró en dos ocasiones citando a personas que ya habían declarado, o equivocando hechos en el cuestionario.

La sesión arrancó casi sin público. La policía estableció un tupido filtro de entrada, en el que se cacheó a los asistentes, retirándoles bolígrafos y botellas de agua. El sargento que se parece a Idi Amin campaba a sus anchas por el cine con una pistola en una mano y las medicinas de Felipe Ondó en la otra. Este Amin vivió su instante de gloria a primera hora, cuando uno de los fiscales llamó a declarar a Gregorio Endong Elá y se descubrió que no estaba presente en la sala y que nadie conocía su paradero. Nsú exigió datos al sargento, que es el custodio de los presos, y éste los prometió en breve sin que llegasen a ser públicos en momento alguno.

Parentesco

Según avanza el juicio oral, y se descende en el interrogatorio de los procesados menores, se constata que la mayoría de ellos están allí por razones de parentesco o de conocimiento de Felipe Ondó. La fiscalía trata de ahondar en toda contradicción entre lo declarado ante la policía y lo expresado delante del tribunal. Cuando uno de los encausados describió los suplicios, el fiscal general, Antonio Nzambi, lejos de interesarse por el delito denunciado, exclamó: "Si siguen aduciendo torturas, no tenemos más que preguntar". Otro de los procesados, un militar en activo, se mostró comprensivo con los que les pegaban: "Cumplían con su deber en las pesqueras". Ayer, a diferencia de otros días, los que ya han declarado no recibieron nuevas palizas en el penal. El castigo se limitó a quitarles la comida entregada por sus familiares, dejándoles sin cena ni desayuno.

Y Radio Malabo, que asiste a otro juicio, dijo en su boletín: "Según avanza el proceso, las pruebas son más evidentes".

Seguridad e inmigración